

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Examen de la crisis y el periodo post-electoral inmediato

La crisis política que se empezó a manifestar desde mayo 2016 en Guatemala, aún no tiene un cauce de salida que permita solventarla en alguna medida. Los cambios democráticos en la vida política e institucional del país, aún no se gestan adecuadamente. No obstante, se observan mayor sensibilidad en la ciudadanía y en las instituciones, derivada de la masiva presión social en calles y carreteras, hasta la semana previa al evento electoral.

La renuncia y encausamiento del expresidente Pérez Molina, la toma de posesión de la presidencia en forma provisional por el licenciado Maldonado Aguirre y las elecciones unos pocos días después, generaron alivio a las tensiones y una contención a las crecientes presiones ciudadanas, en el marco de la crisis. Resultaría contraproducente, sin embargo, ignorar todo lo sucedido y asumir un escenario de borrón y cuenta nueva, por las siguientes razones:

- La disputa entre élites empresariales y políticas (con sus propias manifestaciones en el nivel local) por el control de los recursos y fuerza concentrada en el aparato estatal, se mantiene en curso aunque con un perfil distinto. El Estado continúa cooptado por grupos de capitales con importante poder.
- La presión de gobiernos extranjeros por razones de geopolítica, prevalece.
- La disfunción institucional, el desfinanciamiento de los servicios públicos, el déficit fiscal y el endeudamiento, son alarmantes y sin visos de solución en el corto plazo. La corrupción y la reducción de la mediación del Estado se manifiesta en el descrédito del Organismo Legislativo, en los desbordamientos sociales crónicos y latentes, al igual que en la incertidumbre del resultado de la segunda vuelta electoral para elegir la nueva cabeza del Ejecutivo.
- Más que nunca, se han puesto en evidencia claros signos del decaimiento institucional de los partidos políticos, sin base social, completamente privatizados, con financiamiento de dudosa procedencia, sin programas y prioridades construidas sobre las verdaderas necesidades de la población, sin formulaciones políticas que antepongan y abonen a la Nación guatemalteca y con flagrantes e impunes acciones que violan la ley y a la autoridad electoral.



Todo esto se mantiene como parte de una realidad construida a partir de ilusiones de mejora, pese a las evidencias históricas, que muestran lo contrario.

La situación de crisis por tanto, sigue vigente en forma plena aunque, ciertamente, las elecciones generales realizadas el 6 de septiembre en su primera jornada, han ofrecido un respiro. Lejos de apreciarlo como una salida definitiva, habría que valorar la oportunidad que representa para encausar un proceso que desemboque en nuevos acuerdos nacionales que recuperen las demandas de los pueblos y sectores marginados de la sociedad guatemalteca.

La significativa asistencia de votantes y los resultados electorales, requieren de nuevas lecturas que vayan más allá de las interpretaciones simples en cuanto a preferencias por candidaturas u organizaciones políticas, *contravoto* o ilusionismo electoral. Reflejan la impronta de la histórica lucha por hacer efectivas las demandas sociales, de recuperación de las instituciones y los valores democráticos, de fundir la ética en la política y la ética en la función pública, de avivar la dimensión política de la participación ciudadana y de la expresión de la voluntad popular. Hay un contundente mensaje en contra de la corrupción y la impunidad, al igual que en favor de la necesidad de sanear al sistema de partidos políticos y de depurar a sus representantes en las instituciones del Estado.

Sin embargo, el efecto de esa demostración es escaso en virtud del carácter antidemocrático de la ley electoral. Las mismas reglas estimularon la continuidad de viejas prácticas y las consecuencias fueron, nuevamente, de inconformidad ciudadana en muchos lugares.

En efecto, las elecciones también mostraron las serias digresiones del régimen electoral vigente. El proceso previo al evento de emisión del sufragio se vio plagado de irregularidades, vicios e ilegalidades que verifican el deterioro del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad electoral. Las elecciones fueron literalmente salvadas por la concurrencia, la disciplina, la paciencia y el civismo ciudadano.

Ahora bien, las inconformidades y desbordamientos sociales a nivel local (que suman poco menos de ochenta casos), en apariencia, por los resultados en las urnas, por maniobras de algunos partidos y candidatos o por otros hechos, fueron producidas tanto por las digresiones aludidas como por las dinámicas de intereses clientelares vinculadas a puestos



de elección y organizaciones políticas que percibieron amenazadas o fracasadas sus expectativas.

Es de lamentar la quema de urnas, las heridas a pobladores y agentes de la fuerza pública y la pérdida de la vida de varias personas. La futilidad de estos hechos verifica las fisuras y descomposición del sistema político y reafirman la vigencia de los componentes fundamentales de la crisis.

La sustitución de personas y partidos en los puestos de elección de la administración pública, no solventa ni resuelve los problemas de fondo del régimen. Es más, ofrece un panorama desolador frente a la segunda vuelta electoral del próximo 25 de octubre; además, en varios casos por la destrucción de más de un tercio de las boletas, deberá repetirse la elección de alcaldías y consejos municipales.

Ahora bien, la disposición ciudadana al sufragio que revirtió las predicciones electorales, puso en aprietos a las candidaturas que se consideraban ganadoras y dejó un panorama complejo en el Congreso de la República. El corrimiento del voto hacia opciones hasta hace unas semanas impensadas para una segunda vuelta, ha planteado serias complicaciones por la disputa del segundo lugar.

En este marco, el país atraviesa un periodo presidencial breve. El presidente Maldonado Aguirre representa un gobierno provisional de corta duración, cuya misión es una transición administrativa ordenada. Su debilidad es de origen porque no es resultado del voto popular y por tanto, difícilmente se pueden esperar grandes logros y realizaciones en solo cuatro meses.

Se confirma, entonces, que la sostenibilidad del gobierno de transición depende de decisiones basadas en el consenso social y la más completa transparencia. El presidente Maldonado goza de respaldo de algunos sectores de la sociedad civil y varios de estos, mantienen el interés por avanzar en algunas de las reformas requeridas al Congreso en los últimos meses. No obstante, las simpatías nacionales e internacionales y los respaldos sociales, son aún insuficientes para esas tareas.

El futuro inmediato, posterior al 14 de enero de 2016, se presenta incierto porque aún no hay idea acerca de los planes del próximo gobierno. De esa cuenta, el camino de la concertación social y la construcción de acuerdos adquieren alta importancia para sentar



bases nuevas y democráticas, que conduzcan a la solución de la crisis y la estabilidad política.

Con base en estos elementos, se recomienda:

- Estimular reflexiones y pronunciamientos en torno al proceso electoral, su resultado, las perspectivas y las verdaderas preocupaciones de los distintos sectores sociales sobre la crisis política en el país y las rutas para solventarla considerando distintos plazos.
- Darle continuidad a la demanda ciudadana respecto a las reformas y cambios profundos en las dimensiones económicas, socio-culturales, políticos institucionales y ambientales, orientados a la apertura de un proceso que desemboque en una Sociedad y un Estado democráticos.
- Promover ejercicios de incidencia política para que, en el corto plazo, los temas verdaderamente importantes se incorporen en la discusión nacional y se transite decididamente hacia la eliminación de todas las formas de exclusión e inequidad.

Guatemala, 16 de septiembre de 2015.